

***Insurrección y triunfo de la Revolución Popular
Sandinista en su contexto internacional***
Los meses previos a la insurrección

Diplomado de Historia

Insurrección y triunfo de la RPS en su contexto internacional

Módulo III

La insurrección popular, entre tensión regional y mediación diplomática

Unidad III

Los meses previos a la insurrección

Índice

Objetivos

1. Introducción	1
2. Nicaragua tras el fracaso de la mediación	3
3. Washington sin rumbo	7
4. Venezuela, Panamá y el fin de la aventura intervencionista	10
5. México y la conspiración Sandinista	14
6. Cuba y la situación regional	17
7. La guerra secreta en Centroamérica	20
8. Conclusión	24
9. Referencias	25

Objetivos

- Identificar los motivos del fracaso de la mediación norteamericana y como esta situación tuvo sus consecuencias en los equilibrios internos en el contexto de crisis que vivía Nicaragua.
- Explicar cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a que Venezuela y Panamá redujeran su protagonismo en el marco de la crisis política de Nicaragua y el interés del gobierno de México en respaldar a los sandinistas en la lucha en contra de la dictadura.
- Analizar el contexto internacional que permitió que Cuba apoyara a los guerrilleros sandinistas y su influencia en la unidad de las tres tendencias.

1. INTRODUCCIÓN

El colapso de la mediación norteamericana, en enero de 1978, llevó a una especie de distensión dentro de Nicaragua. Por un lado, Somoza parecía cada vez más fuerte, seguro de que lo peor de la crisis había pasado. Mientras que en el exterior dio la impresión de que los Estados Unidos, Panamá y Venezuela estaban limitando sus políticas en contra de la dictadura somocista al ver restringidas sus opciones para intervenir en Nicaragua. Los meses entre febrero y mayo de 1979 han sido poco estudiados, pero fueron muy importantes en el marco de los preparativos que de manera clandestina el FSLN realizó en ese periodo.

Esta unidad argumenta que estos meses, analizados desde la perspectiva de la política regional centroamericana, fueron cruciales para comprender la debacle de la dictadura. Daba la impresión de que a inicios de 1979 la caída de Somoza no era 'inevitable', en cambio, la dictadura aparentaba fortalecimiento y cada vez consideraba su certeza sobre su victoria frente a la oposición. Partiendo de esta idea, en esta unidad se plantea explicar el inicio del nuevo ciclo insurreccional, tras analizar el "vacío de poder" que dejó el fracaso de la mediación norteamericana. Además, se debe prestar especial atención al papel de dos nuevos actores: México y Cuba. Comenzaremos con precisar la situación de la dictadura somocista entre febrero y mayo de 1979, destacando el control sobre las fuerzas armadas, el aparato administrativo, las relaciones internacionales, y su situación económica. Posteriormente, se estudiarán las consecuencias del colapso de la mediación y los sucesos de diciembre de 1978, mostrando los espacios vacíos que provocaron el retraimiento de los gobiernos de Venezuela, Panamá y Estados Unidos. Lo que llevó a una profunda reconfiguración política a nivel regional, caracterizada por una mayor participación de Cuba y México en el conflicto.

Finalmente, se abordará el papel central del FSLN en este proceso. Contrariamente a la mayoría de las explicaciones sobre los últimos meses del conflicto que han considerado que el Frente Sandinista se encontraba en gran medida fortalecido, este capítulo busca mostrar cómo durante los primeros meses de 1978 el Frente Sandinista no se encontraba en circunstancias óptimas, sino que por el contrario hubo situaciones difíciles a las cuales el FSLN se tuvo que enfrentar. Esta unidad reconstruirá la manera en la que, desde estas posiciones complejas, el FSLN logró modificar la situación internacional a su favor, logrando entre otras cosas, un apoyo solidario más amplio por parte del gobierno revolucionario de Cuba.

NICARAGUA TRAS EL FRACASO DE LA MEDIACIÓN

Para inicios de 1979, el régimen somocista se encontraba en un estado de descomposición y debilidad. La dictadura había logrado resistir una insurrección nacional, una huelga general y la trampa de una mediación liderada por Estados Unidos.

Por otro lado, había aumentado considerablemente su fuerza militar e incrementado la compra de armas y equipos militares a Israel, Argentina así como vehículos militares previamente utilizados por el ejército Federal de Alemania. Estos equipos eran especialmente importantes ya que la Guardia Nacional tenía que mantener el control de las carreteras para responder rápidamente a las tácticas insurreccionales sandinistas.

En la medida en que la alianza regional antisomocista perdió fuerza a principios de 1979, la alianza anticomunista de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador se había mantenido firme. Misma que entre octubre y enero de 1978 y los meses posteriores había sido una importante fuente de apoyo económico, político y militar para la dictadura.

Para finales de marzo de 1979, el nivel de confrontación nuevamente había aumentado. En los caminos y en las ciudades, las emboscadas a las patrullas de la Guardia Nacional eran constantes, y éstas con frecuencia respondían con una fuerza brutal en contra de poblaciones desarmadas. Los enfrentamientos cotidianos, así como el constante temor frente a una posible escalada de la violencia, había alterado seriamente la vida cotidiana, hecho que se reflejaba en una crónica escasez de alimentos, transporte, trabajo y falta de seguridad.

La nueva posición favorable de la dictadura y la sensación de haber sobrevivido a la crisis llevaron a Somoza a cometer varios errores políticos importantes, que dañaron a la dictadura en un momento en el que la situación seguía siendo inestable. A pesar de ello, era innegable que, para mayo de 1979, Somoza demostraba que tenía control sobre la vida política del país, y según su percepción, tenía poco que temer de sus enemigos externos e internos.



2. NICARAGUA TRAS EL FRACASO DE LA MEDIACIÓN

Para inicios de 1979, el régimen somocista se encontraba en un estado de descomposición y debilidad grave. Sin embargo, la caída de Somoza no era inevitable. La dictadura había logrado resistir una insurrección nacional, una huelga general y la trampa de una mediación liderada por Estados Unidos. En el camino, Somoza había logrado maniobrar y ganar la partida a veteranos políticos como Carlos Andrés Pérez, la "oposición moderada" y al gobierno norteamericano y sus negociadores.

También, había aumentado considerablemente su fuerza militar. La Guardia Nacional (GN) inició una campaña intensiva de reclutamiento y fortalecimiento de la institución. Para 1979, miles de campesinos habían sido reclutados a la fuerza en la Guardia Nacional: *"Al igual que en los períodos pacíficos en los que el reclutamiento era voluntario e incluso deseable, el reclutamiento ahora combinaba llamamientos materiales a los campesinos con la amenaza latente de la fuerza."* La capacidad del gobierno para movilizar a miles de campesinos e integrarlos a los aparatos represivos del Estado, aparentaba la existencia de un Estado en pleno funcionamiento y con significativa capacidad de coerción y movilización de la población, y no una estructura al borde del colapso. De acuerdo con estimaciones de los aparatos de inteligencia de la CIA, elaborados a finales de enero de 1979, la Guardia Nacional había aumentado su número de 8,200 a 11,000 efectivos.

Por otro lado, se dio la compra de armas y equipos militares a Israel, Argentina y en el 'mercado negro'. De acuerdo con documentos del Departamento de Estado, a principios de febrero, un "intermediario civil" había comprado más de 150 vehículos militares previamente utilizados por el ejército de la República Federal de Alemania, para equipar a la Guardia Nacional. Estos vehículos fueron enviados ilegalmente desde Holanda en contenedores falsamente indicados como equipos agrícolas para Brasil. En palabras del Departamento de Estado: *"La adquisición de estos camiones incrementará significativamente la movilidad táctica de la Guardia Nacional."* Estos equipos eran especialmente importantes ya que la Guardia Nacional tenía que mantener el control de las carreteras para responder rápidamente a las tácticas insurreccionales sandinistas.

El proceso de rearme fue posible gracias a la llegada de millones de dólares en préstamos de emergencia. El desembolso de 20 millones del fondo de estabilización centroamericano, recibido en diciembre gracias al apoyo de Guatemala y El Salvador, ayudó a estabilizar la situación económica en Nicaragua.

A su vez, la banca privada norteamericana fue clave en el proceso de fortalecimiento de la dictadura. A principios de marzo, la embajada de los Estados Unidos en Managua informó al Departamento de Estado que el presidente del Banco Central de Nicaragua, Roberto Incer, había ofrecido un reporte completo de la situación económica del país a la Cámara de Comercio Norteamericana, en un intento por calmar los ánimos de los inversionistas. En esa ocasión, Incer informó al embajador Solaún que: *"Los bancos comerciales estadounidenses han sido de gran ayuda para mantener líneas de crédito a corto plazo"*.

Estos préstamos a corto plazo habían sido esenciales para aliviar la presión sobre las finanzas estatales, y junto con los fondos provenientes de la cosecha de algodón, habían permitido pagar las deudas inmediatas de Nicaragua a finales de 1978.

Informes de la CIA confirmaban esta tendencia; en un reporte presentado el 15 de marzo, los analistas de la agencia de inteligencia indicaban: *"Somoza está haciendo todos los esfuerzos posibles para enfrentar la crisis económica: solicita préstamos de otros regímenes militares centroamericanos y del fondo monetario regional, para refinanciar la deuda con bancos comerciales extranjeros, solicita préstamos de reserva [del Fondo Monetario Internacional] y promulga estrictas medidas fiscales internas"*.

Más allá de su claro énfasis en el poderío militar, la dictadura somocista también contaba con la simpatía o lealtad de miles de las estructuras del gobierno y del Partido Liberal Nacionalista (PLN) y la burocracia gubernamental. Esta estructura de funcionarios locales, y la mencionada capacidad de movilización de la población rural, era la razón por la cual durante el proceso de mediación un plebiscito controlado por la

dictadura habría resultado absolutamente inconcebible para la oposición. Es importante señalar, a su vez, que tanto la Guardia Nacional como en PLN, se habían mantenido leales a Somoza a pesar de la presión norteamericana, las ofertas de la oposición moderada y las amenazas sandinistas.

La capacidad de movilización del régimen aparentaba firmeza y se había mantenido operativa a tal grado que, para el 1 de mayo de 1979, a pocas semanas del inicio del nuevo ciclo insurreccional, la dictadura somocista todavía era capaz de movilizar entre 18 mil y 20 mil nicaragüenses (aunque estos fueran acarreados, sobornados, amenazados, etc.) para asistir al evento del día del trabajo en el centro de Managua.

La renovada posición de la dictadura a principios de 1979, estaba directamente relacionada con una nueva correlación de fuerzas a nivel internacional y regional. El debilitamiento de la alianza regional antisomocista tras la derrota electoral de Carlos Andrés Pérez y, como se verá más adelante, la presión de los Estados Unidos sobre Panamá, al igual que la postura más firme de Costa Rica hacia los sandinistas, fortalecieron aún más a Somoza.

En la medida en que la alianza regional antisomocista perdió fuerza y coherencia a principios de 1979, la alianza anticomunista de los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador se había mantenido firme. Misma que había permitido ente octubre y enero de 1978 contrarrestar la crisis revolucionaria, y durante los meses posteriores había sido una importante fuente de apoyo económico, político y militar.

A pesar de estas nuevas señales alentadoras para la dictadura, la situación interna en el país era extremadamente delicada. Para finales de marzo de 1979, el ciclo de violencia nuevamente había aumentado. En los caminos y en las ciudades, las emboscadas a las patrullas de la Guardia Nacional eran constantes, y éstas con frecuencia respondían con una fuerza brutal. Los militares de la dictadura se encontraban cada vez más alterados por el constante hostigamiento de guerrilleros y milicias populares, lo que llevó a un marcado aumento de la violación de los derechos humanos: asesinatos, secuestros, tortura, violación y demás formas de violencia en contra de supuestos subversivos.

La represión de la Guardia Nacional en contra de la población, y en contra de cualquier forma de oposición había llegado a niveles insostenibles. Por ejemplo, a mediados de febrero, la Guardia asesinó a cinco jóvenes que se habían tomado una iglesia en León, en apoyo a una huelga hospitalaria. En Masaya, un comando de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería (EEBI) asesinó a un joven desarmado dentro de una escuela religiosa, sólo por negarse a seguir las instrucciones de los militares. Reportes de inteligencia norteamericanos indicaban que, sólo en enero, la Guardia había asesinado o capturado a más de 95 sandinistas. Grupos armados paramilitares con frecuencia secuestraban a posibles colaboradores sandinistas para ser interrogados, torturados y asesinados en casas de seguridad.

A mediados de febrero la embajada norteamericana informaría: *"Toda la evidencia disponible indica que en Nicaragua opera un grupo organizado pro-régimen con capacidad de violencia"*. El documento añadía que la violencia en contra de colaboradores del régimen también era significativa: *"Los casos de amenazas y violencia contra los partidarios del régimen, especialmente los informantes, parecen exceder con creces las actividades terroristas similares contra los opositores del régimen"*. Esto había llevado a una espiral de violencia, acelerada por el impulso que la dictadura le había dado a la militarización del país. Los enfrentamientos cotidianos, así como el constante temor frente a una posible escalada de la violencia, había alterado seriamente la vida cotidiana, hecho que se reflejaba en una crónica escasez de alimentos, transporte, trabajo y falta de seguridad.

Enfrentados con una casi completa falta de oportunidades para oponerse a Somoza, y en vista de la falta de reacción del gobierno norteamericano, la "oposición moderada" estaba abandonando cualquier idea de negociación. En marzo el Partido Conservador presentó una iniciativa comprehensiva de reforma política en el Congreso de Nicaragua, para presionar a la dictadura a ceder amplios poderes y mostrar su interés para llegar a una solución negociada al conflicto.

El nivel de polarización y odio hacia los Somoza era tal que cualquier intento de colaborar con la dictadura era ampliamente criticado, en particular tras el brutal uso de las fuerzas armadas en septiembre de 1978. Como resultado, la oposición moderada había quedado paralizada, sin poder conciliar con la dictadura y sin poder disputar el poder a los Somoza.

Sin muchas opciones para realizar un cambio de gobierno en Nicaragua, la oposición moderada se dio a la tarea de intentar organizar un posible golpe de Estado junto con algunos oficiales disidentes de la Guardia Nacional. Del otro lado del espectro político, la fragmentación progresiva del FAO llevó a que el FSLN pudiera absorber a los grupos de oposición moderada que habían quedado desilusionados con el proceso de mediación.

Hubo sectores del FAO (como el PLI y el PPSC) que trataron de acercarse a la organización política de izquierda Movimiento Pueblo Unido (MPU), que agrupaba a varias fuerzas políticas y sociales, incluidos organismos intermedios del sandinismo. Además, hubo posiciones de algunos dirigentes de este mismo frente de derecha, que llegaron a afirmar que el sandinismo era preferible a un Somoza fortalecido y vengativo. El 23 de enero, un memorándum del Departamento de Estado señalaba al respecto: *"Ante la probabilidad de represalias, [la oposición moderada] puede apoyar a la izquierda radical a pesar de su oposición a su ideología"*.

Mientras los sandinistas lograban aumentar su influencia sobre algunos de los líderes moderados, Somoza comenzó una campaña sistemática de intimidación de la "oposición moderada" y en particular de los empresarios pertenecientes al FAO. A finales de abril, Somoza ordenó el arresto de algunos de ellos, quienes fueron acusados de instigar para delinquir y desacato a la autoridad. Estos arrestos fueron parte de una serie de golpes en contra de los líderes de la oposición moderada junto con varios dirigentes obreros y sindicalistas radicales, de reconocida filiación marxista. Con ello se pretendía, neutralizar las posibles acciones políticas de estos movimientos en confluencia con las acciones guerrilleras.

Somoza también aumentó su presión en contra del gobierno de Costa Rica para que expulsara a los sandinistas de su territorio. Desde diciembre de 1978, el gobierno somocista había insinuado, en varias ocasiones la posibilidad de realizar operativos militares en Costa Rica para detener las incursiones del FSLN desde sus bases en aquel país. El 27 de diciembre, Somoza declaró en conferencia de prensa que *"nosotros le estamos marcando el tiempo a Costa Rica y estamos haciendo conciencia ante el Continente y el Mundo, para que cuando venga una agresión desde el territorio costarricense nos podamos defender, aun invadiendo a Costa Rica."*

De acuerdo con las memorias del ministro de Seguridad de Costa Rica, José Echeverría Brealey, su gobierno tenía informes confiables por parte de su 'red de espías' así como por el embajador de Guatemala en San José, de que una invasión a Costa Rica era inminente. Tras buscar el apoyo del gobierno de Venezuela, y llevar el problema frente a la OEA, la temida invasión nicaragüense no tuvo lugar. Estas maniobras posiblemente fueron una forma de intimidación en contra del gobierno de Costa Rica para que actuara en contra de los sandinistas y, al igual que los intentos de presionar a la oposición moderada, tendría importantes repercusiones posteriores.

La nueva "fortaleza" militar de la dictadura y la sensación de haber sobrevivido a la crisis llevaron a Somoza a cometer varios errores políticos importantes, que dañaron a la dictadura en un momento en el que la situación seguía siendo inestable. A pesar de ello, era innegable que, para mayo de 1979, Somoza demostraba que tenía un poder casi absoluto sobre la vida política en el país, y según su percepción, tenía poco que temer de sus enemigos externos e internos.

WASHINGTON SIN RUMBO

El rechazo de Somoza al esfuerzo de mediación norteamericano causó confusión en Washington. Durante los siguientes meses, la posición norteamericana se debilitó considerablemente, en la medida que la situación en Nicaragua pasó a segundo plano para la administración Carter.

El 25 de enero de 1979, en una reunión de alto nivel en Washington para discutir el futuro de la política estadounidense hacia Nicaragua, a la que asistieron altos funcionarios norteamericanos, decidieron retirar la misión militar y reducir el personal de la embajada, suspender los programas de ayuda económica bilateral y tomar medidas en la OEA para presionar a la dictadura, y convencer a otras naciones para que dejaran de vender armamento a Somoza.

Sin muchas alternativas para lidiar con la dictadura, Estados Unidos intentó utilizar nuevamente a la OEA como un mecanismo de presión.

La administración Carter decidió apoyar una nueva reunión de ministros de la OEA, buscando que se aprobara una resolución de fuerte condena en contra de Nicaragua.

El 23 de febrero, el gobierno de los Estados Unidos pidió el apoyo del gobierno de México para tomar una postura fuerte en la OEA en contra de Somoza.

A pesar del interés de Washington para llevar el asunto nicaragüense frente a la OEA, los gobiernos anti-somocistas y los Estados Unidos decidieron no convocar la reunión ya que no contaban con suficientes votos de otros países latinoamericanos, para lograr una condena en contra del régimen.

Para el 16 de marzo, el Departamento de Estado reconoció que el gobierno norteamericano no contaba con los elementos para influir en Nicaragua y a finales de marzo se encontraba 'paralizada' frente a la dictadura, incapaz de lograr una resolución condenatoria en la OEA y sin una alternativa viable frente a Somoza.

La decisión norteamericana de 'alejarse' del problema de Nicaragua parecía confirmar las sospechas de los países latinoamericanos de que los Estados Unidos habían finalmente decidido mantener el Somocismo, frente a cualquier otra opción de cambio radical.



3. WASHINGTON SIN RUMBO

El rechazo de Somoza al esfuerzo de mediación norteamericano causó confusión en Washington. oficiales de la administración Carter se vieron enfrentados con los límites de su proyección hegemónica en la región. Durante los siguientes meses, la posición norteamericana se debilitó considerablemente, en la medida que la situación en Nicaragua pasó a segundo plano para la administración Carter.

Anthony Lake, entonces director de Policy Planning del Departamento de Estado, escribió en su libro sobre la crisis en Nicaragua que: "[...] *en lenguaje burocrático, el tema estaba en un segundo plano en lo que a Washington concernía*". Mientras que Washington estaba negociando la ratificación de sus acuerdos de limitación nuclear SALT-II con la Unión Soviética, la normalización de las relaciones con la República Popular China, y el deterioro del gobierno autoritario Mohammad Reza Pahlavi en Irán, la aparente calma en Nicaragua generó una falsa sensación dentro de la administración Carter de que lo peor de la crisis había quedado atrás.

El 25 de enero de 1979, en una reunión de alto nivel en Washington para discutir el futuro de la política estadounidense hacia Nicaragua. A la reunión asistieron altos funcionarios del Departamento de Defensa, los Joint Chiefs of Staff, la CIA, el National Security Council, la Agencia para el Desarrollo Internacional, la Casa Blanca, y el Departamento de Estado.

De acuerdo con un memorándum sobre la reunión, los presentes decidieron de forma unánime tomar medidas claras para mostrar el disgusto del gobierno norteamericano: "*Había llegado el momento de dar una serie de pasos que indicarían que Estados Unidos ya no sería uno de los pilares de apoyo de Somoza*".

Sin muchas alternativas para lidiar con la dictadura, los Estados Unidos intentaron utilizar nuevamente a la OEA como un mecanismo de presión. Desde diciembre de 1978, el gobierno norteamericano había bloqueado cualquier discusión en la OEA sobre Nicaragua por temor a que esto llevara al colapso de la mediación internacional. Esta actitud fue considerada como 'permissiva' por parte de varios gobiernos latinoamericanos y profundizó las divisiones entre los Estados Unidos y la 'alianza anti-somocista'. Para presionar al gobierno norteamericano, Carlos Andrés Pérez financió la publicación en los Estados Unidos del reporte de la OEA que describía de forma gráfica las secuelas violentas de la pacificación somocista. El 9 de febrero, el presidente venezolano recriminó al embajador norteamericano que, a pesar de lo sucedido, su gobierno no había mostrado abiertamente su rechazo a Somoza y sus métodos autoritarios.

A pesar de la insistencia de los países anti-somocistas, el gobierno norteamericano se encontraba dividido entre su 'deseo' de censurar a Somoza, defender los principios democráticos y mantener buenas relaciones con el resto de los países autoritarios de la región. Como lo señaló el subsecretario para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, John Bushnell, en un memorándum: "*La agenda oculta que subyace al debate y la resolución [de la OEA] será la cuestión básica del apoyo o la oposición a los regímenes autoritarios. Como lo expresó recientemente el presidente Pérez de Venezuela, ha llegado el momento de que las democracias se enfrenten a las dictaduras. Lamentablemente hay muchos regímenes autoritarios en América Latina*".

El comentario de Bushnell evidenciaba las profundas contradicciones y dificultades de la política de la administración Carter hacia América Latina. Finalmente, tras dos meses de obstrucción norteamericana, la administración Carter decidió apoyar una nueva reunión de ministros de la OEA y la discusión de su informe, buscando que se aprobara una resolución de fuerte condena en contra de Nicaragua.

El 23 de febrero, el gobierno de los Estados Unidos pidió el apoyo del gobierno de México para tomar una postura fuerte en la OEA en contra de Somoza. La falta de apoyo norteamericano a los intentos anteriores no había pasado desapercibida en la Cancillería de México. De acuerdo con un memorándum elaborado para el secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel, durante la reunión de ministros en septiembre, la actitud "bastante tibia" de los Estados Unidos había condenado la resolución condenatoria apoyada por México y las democracias latinoamericanas. La Cancillería consideraba que si los Estados Unidos buscaban

promover una resolución crítica en contra de Nicaragua: *"habría que manifestar [...] que es muy importante que den a conocer su posición para que todos los demás países la conozcan ya que el problema sería contar con el número de votos suficientes."* Este comentario no sólo se refería a la OEA, sino buscaba que el gobierno norteamericano aclarara 'de una vez por todas' su confusa política hacia Nicaragua.

A pesar del interés de Washington para llevar el asunto nicaragüense frente a la OEA, los gobiernos anti-somocistas y los Estados Unidos decidieron no convocar la reunión ya que no contaban con suficientes votos de otros países latinoamericanos, para lograr una condena en contra del régimen. El 3 de marzo, los embajadores ante la OEA de Estados Unidos, Colombia, Venezuela y México confirmaron esta apreciación: *"Estamos de acuerdo en que si [la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores] se celebrara ahora, no habría suficientes votos afirmativos [...] para aprobar una resolución relativamente suave"*.

El embajador mexicano, intentó modificar el objetivo de la reunión de ministros para convertirla en una clara señal por parte de las democracias en contra de Somoza, y en particular de los Estados Unidos en contra de Somoza. De la Colina, propuso convocar la reunión de ministros, a sabiendas de que una resolución no sería aceptada y sugerir que los países que apoyaban una resolución en contra de la dictadura cortaran relaciones con Nicaragua, incluidos los Estados Unidos. Esta era una maniobra encaminada a presionar a la administración Carter a distanciarse de la dictadura de forma clara, como De la Colina, señaló: *"Si Estados Unidos no pudiera apoyar tal resolución [...] tal táctica sería inútil"*. A pesar de la presión De la Colina y Machín, el representante de Venezuela en la OEA, el embajador norteamericano consideró que su país no podía respaldar esa maniobra debido a los efectos que podría tener para la ratificación de los tratados del Canal de Panamá y sus relaciones con Guatemala y Nicaragua. Sin un acuerdo, los tres embajadores decidieron no convocar una reunión de la OEA.

El gobierno norteamericano, había decidido regresar a una política no-intervencionista. Para el 16 de marzo, el Departamento de Estado reconoció que el gobierno norteamericano no contaba con los elementos para influir en Nicaragua en ese momento: *"En resumen, no creemos que exista oportunidad para nuevas iniciativas productivas en este momento. Por razones políticas y de derechos humanos, nuestra postura debería ser tranquila pero correcta"*. A finales de marzo el gobierno norteamericano, al igual que la oposición moderada dentro de Nicaragua se encontraba 'paralizada' frente a la dictadura, incapaz de lograr una resolución condenatoria en la OEA y sin una alternativa viable frente a Somoza.

Para los países latinoamericanos la posición del gobierno norteamericano era particularmente confusa y contradictoria, ya que estaban acostumbrados a las maniobras intervencionistas de Washington. La decisión norteamericana de 'alejarse' del problema de Nicaragua parecía confirmar las sospechas de los países latinoamericanos de que los Estados Unidos habían finalmente decidido mantener el 'Somocismo', frente a cualquier opción de cambio radical. Como se verá más adelante esta percepción modificó profundamente la política de los países anti-somocistas, durante los últimos meses de la crisis.

VENEZUELA, PANAMÁ Y EL FIN DE LA AVENTURA INTERVENCIONISTA

Durante 1978 el apoyo de Venezuela y Panamá hacia el FSLN tenía como objetivo principal moderar al grupo revolucionario, debilitar a Somoza y presionar a los Estados Unidos para que interviniera en Nicaragua. El colapso de la mediación norteamericana evidenció los límites de esta opción, y llevó a un replanteamiento de la política de los gobiernos anti-somocistas hacia el FSLN.



La capacidad de acción e influencia de Carlos Andrés Pérez se vio limitada, después de la pérdida de las elecciones en diciembre; mientras que, en Panamá, la discusión sobre la ratificación e implementación de los Tratados del Canal de Panamá ató las manos de Torrijos y limitó también la capacidad del gobierno panameño de realizar acciones en Nicaragua por temor al colapso de dichos acuerdos.

A inicios de 1979, ni el presidente venezolano, ni el general Torrijos podían suministrar más ayuda militar al Frente Sandinista. Por esta razón, Andrés Pérez, solicitó a su homólogo cubano que proporcionara armamento al FSLN. El presidente venezolano había fallado al presionar a los Estados Unidos para que tomara medidas en contra de Somoza, y tras el fin de la mediación es posible que el acercamiento entre Fidel Castro y los sandinistas, evidenciado por un aumento considerable de la ayuda militar cubana, podía servir como la justificación perfecta para lograr una intervención norteamericana.

El acercamiento entre Cuba y los sandinistas sirvió para que, durante febrero de 1979, Torrijos y Pérez insistieran al gobierno norteamericano sobre la necesidad de organizar un golpe militar dentro de las filas del somocismo.

A diferencia de Venezuela que había limitado su apoyo a los sandinistas por un cambio de gobierno interno luego de las elecciones, Panamá fue forzado por las discusiones en el senado norteamericano sobre la ratificación e implementación de los Tratados del Canal de Panamá. Bajo una fuerte presión norteamericana, el gobierno panameño decidió limitar su apoyo a los sandinistas. Sin embargo, siguió permitiendo que el FSLN y la inteligencia cubana operaran abiertamente en ese país.

A pesar de haber cortado su apoyo directo a los sandinistas, los gobiernos de Panamá y Venezuela se mantuvieron firmes en sus intentos de fortalecer a los grupos moderados dentro del Sandinismo.

4. VENEZUELA, PANAMÁ Y EL FIN DE LA AVENTURA INTERVENCIONISTA

Debe de recordarse que durante 1978 el apoyo de Venezuela y Panamá hacia el FSLN tenía como objetivo principal moderar al grupo revolucionario, debilitar a Somoza y presionar a los Estados Unidos para que interviniera en Nicaragua. El colapso de la mediación norteamericana evidenció los límites de esta opción, y llevó a un replanteamiento de la política de los gobiernos anti-somocistas hacia el FSLN. Sin la posibilidad de incidir sobre el gobierno norteamericano, y confrontados con diversos problemas internos, los países anti-somocistas llegaron a un acuerdo para limitar su ayuda militar directa para el FSLN.

La capacidad de acción e influencia de Carlos Andrés Pérez se vio limitada, después de la pérdida de las elecciones en diciembre; mientras que, en Panamá, la discusión sobre la ratificación e implementación de los Tratados del Canal de Panamá ató las manos de Torrijos y limitó también la capacidad del gobierno panameño de realizar acciones en Nicaragua por temor al colapso de los acuerdos.

A mediados de febrero, durante una conversación con el embajador norteamericano en Panamá, Omar Torrijos aceptó que en el pasado había ayudado a los sandinistas, pero que durante los primeros días de febrero había llegado a un acuerdo con Carlos Andrés Pérez y el próximo presidente venezolano Luis Herrera Campins: *"No involucrarnos más a menos que Costa Rica necesite ayuda"*.

Durante los primeros meses de 1979, Carlos Andrés Pérez, buscó utilizar su última carta para influir en la política del gobierno norteamericano hacia Nicaragua. A inicios de 1979, ni el presidente venezolano ni el general Torrijos podían suministrar más ayuda militar al Frente Sandinista. Por esta razón, Andrés Pérez, solicitó a su homólogo cubano que proporcionara armamento al FSLN, a lo que Fidel [Castro] respondió afirmativamente.

El presidente venezolano había fallado al presionar a los Estados Unidos para que tomara medidas en contra de Somoza, y tras el fin de la mediación es posible que el acercamiento entre Fidel Castro y los sandinistas, evidenciado por un aumento considerable de la ayuda militar cubana, podía servir como la justificación perfecta para lograr una intervención norteamericana. Contradictoriamente, Pérez mostró su "preocupación" por el creciente acercamiento entre Fidel Castro y los sandinistas. El 21 de enero, el presidente se reunió con el embajador norteamericano, William Luers, para discutir la situación tras el colapso de la mediación. La plática giró en torno a Cuba. Luers escribió: *[Pérez] dijo que una vez que deje el poder, los sandinistas y el G-12 ya no buscarán apoyo en Venezuela. Dijo que cree firmemente que una vez que se vaya, Fidel comenzará a trabajar directamente con los sandinistas [...] Dijo que Fidel le dijo al ministro de Relaciones Exteriores Consalvi, cuando este último estaba en La Habana, que continuaría donde lo dejó Pérez"*.

Luers consideró que esta supuesta declaración de Fidel era una hipérbole típica del presidente venezolano. Sin embargo, Cuba era, de forma realista, la última opción de apoyo bélico para los guerrilleros sandinistas. El 13 de febrero, Pérez nuevamente se entrevistó con el embajador Luers a quien señaló que no proporcionaba ninguna ayuda militar o financiera a los sandinistas ya que estaba "imposibilitado" por el proceso de transición; sin embargo, añadió que le gustaría poder apoyar a los sandinistas, *"ya que con toda seguridad van a recurrir a Fidel tarde o temprano. [...]"* Luers añadió: *"Predice que los sandinistas irán a la guerra y necesitarán ayuda. Nadie puede ayudarlos excepto Fidel"*.

El acercamiento entre Cuba y los sandinistas sirvió para que, durante febrero de 1979, Torrijos y Pérez insistieran al gobierno norteamericano sobre la necesidad de organizar un golpe militar para salvar la situación. En febrero, a pocas semanas de concluir su periodo presidencial, Pérez nuevamente buscó convencer al gobierno norteamericano para tomar medidas intervencionistas en contra de Somoza. Durante una reunión con el embajador norteamericano, el presidente venezolano sugirió que oficiales del ejército norteamericano deberían entablar contacto con elementos dentro de la Guardia Nacional para 'socavar' a Somoza, una velada sugerencia para organizar un golpe de Estado. Luers respondió inmediatamente que: *"Nosotros, incluidas todas las ramas del gobierno de Estados Unidos, estamos fuera de ese negocio y espero que lo sigamos haciendo"*. Para finales de febrero, la negativa de Washington parecía eliminar otra alternativa no-radical para derrotar a Somoza.

Pérez se encontraba particularmente preocupado por el futuro de Costa Rica. Durante meses, el gobierno de Venezuela había garantizado la seguridad de Costa Rica frente a las amenazas de Somoza, sin embargo, con el cambio de gobierno, la garantía de respaldo venezolana quedaba en entredicho. En diciembre y enero, cuando las tensiones entre Costa Rica y Nicaragua podían desembocar en una guerra centroamericana, el gobierno de Venezuela había desarrollado un plan para utilizar a la fuerza aérea venezolana en caso de una invasión de la Guardia Nacional. A finales de enero, Pérez confirmó este plan al comentar al embajador norteamericano Luers que estaba absolutamente dispuesto a defender a Costa Rica con la fuerza aérea, e incluso declaró que tenía un plan para atacar la casa y el "búnquer" de Somoza en Managua: *"Pérez me aseguró que los F3 podían y estaban listos para bombardear el Bunker, pero me preguntó, preocupado, '¿sería eso realmente deseable?' Admitió que si un ataque tuviera éxito, Nicaragua quedaría en manos de los Sandinistas"*

Los gobiernos de Panamá y Venezuela anunciaron a mediados de febrero una serie de ejercicios militares conjuntos en la frontera con Costa Rica, para demostrar a Nicaragua su respaldo al país centroamericano. La embajadora de México en Caracas, Laura Álvarez Morphy, comentó sobre los ejercicios que: *"hasta el momento no se le ha dado gran importancia [...] porque ya no sorprende mucho este tipo de acciones tomadas por el gobierno actual."* A pesar de estos comentarios, pocos en la región sabían que las acciones de ambos gobiernos habían estado a punto de iniciar una guerra centroamericana en septiembre de 1978.

Durante su último mes en el gobierno, Pérez intentó convencer al gobierno norteamericano de la necesidad de enviar una cantidad considerable de armas al gobierno de Costa Rica, para asegurar su soberanía territorial. El presidente venezolano se había mostrado particularmente molesto por tener que pedir un permiso de exportación a los Estados Unidos para transferir más de 1,000 fusiles de los cuales sólo pudieron llegar la mitad ya que el nuevo gobierno venezolano interrumpió el envío de armas a Costa Rica.

A diferencia de Venezuela que había limitado su apoyo a los sandinistas por un cambio de gobierno, Panamá fue forzado a tomar estas medidas por las discusiones en el senado norteamericano sobre la ratificación e implementación de los Tratados del Canal de Panamá; que habían sido fuente de gran contención política y oposición por parte de los grupos conservadores norteamericanos, en particular por los aliados de Somoza en el Congreso, Charles Wilson y John Murphy, quienes se opusieron a su ratificación para presionar a la administración Carter para que modificara su política hacia Nicaragua. A principios de enero, John Murphy, viajó a Panamá para revisar la implementación de los acuerdos del canal y platicar con el presidente Royo.

Ambos sostuvieron una tensa conversación sobre Nicaragua, durante la cual Murphy 'amenazó' al presidente panameño indicándole que se mantuviera lejos de los asuntos internos de Nicaragua: *"Le aconsejó a Royo que Panamá se mantenga lo más alejado posible de la situación nicaragüense y se 'desvincule' de los acontecimientos en Nicaragua; de lo contrario, la noción de participación panameña podría ser desastrosa para la aprobación de la legislación de implementación"*.

A inicios de 1979, el apoyo clandestino de Torrijos a los sandinistas y sus actitudes intervencionistas habían comprometido seriamente la ratificación de los acuerdos. A finales de 1978, había sido descubierta una operación de tráfico de armas, organizada por el cónsul de Panamá en Miami, y por filtraciones de la CIA que indicaban la existencia de vuelos clandestinos provenientes de Cuba con armamento para los sandinistas en Panamá. Estos escándalos habían puesto en entredicho uno de los proyectos políticos más importantes de la administración Carter, y habían causado gran tensión entre su administración y la de Omar Torrijos. A finales de mayo una misión diplomática mexicana a Panamá reportó que el presidente, Aristides Royo, había indicado a Manuel Bartlett, enviado especial de la Cancillería, que el gobierno panameño no podía romper relaciones con Nicaragua *"porque en estos momentos se discute en el Congreso de los Estados Unidos la aprobación [...] de los Tratados del Canal y han sido amenazados de que, si rompen con Nicaragua, los tratados serán bloqueados"*.

Bajo una fuerte presión norteamericana, el gobierno panameño decidió limitar su apoyo a los sandinistas. Sin embargo, siguió permitiendo que el FSLN y la inteligencia cubana operaran abiertamente en el país. La influencia de Panamá sobre el movimiento sandinista disminuyó durante la ratificación de los Tratados del Canal de Panamá, mientras Cuba fue adquiriendo un papel cada vez más importante para el FSLN.

A pesar de haber cortado su apoyo directo a los sandinistas, los gobiernos de Panamá y Venezuela se mantuvieron firmes en sus intentos de fortalecer a los grupos moderados dentro del Sandinismo, para evitar una 'captura' del movimiento por parte de los radicales y del gobierno cubano. En febrero, Carlos Andrés Pérez, llamó al embajador norteamericano Luers, a quien señaló que había tomado varias acciones para apoyar al Grupo de los 12 e incluso había costeado los gastos de una gira internacional de los 12, en un avión prestado por la fuerza aérea panameña. El objetivo de Pérez era expandir los contactos del Grupo de los 12 con varios países moderados de América Latina, como México y República Dominicana. El presidente venezolano intentó también contactar al papa Juan Pablo II, durante su visita a México, para organizar una reunión con Edén Pastora. Todos estos esfuerzos eran más bien de carácter político y diplomático, y buscaban fortalecer a los grupos moderados dentro del Sandinismo.

Torrijos y Pérez también insistieron en la necesidad de que los sandinistas incluyeran a elementos moderados del FAO en sus filas. El 1 de febrero de 1979, el embajador norteamericano, Ambler Moss, se reunió con el presidente de Panamá, Aristides Royo, para indagar sobre el resultado de una reunión que éste había mantenido con el Grupo de los 12. De acuerdo con el informe de la conversación, Royo señaló que había insistido que era necesario que los 12 abrieran su movimiento a los moderados: "*Les aconsejó que ampliaran su base, que incluyeran tantos elementos moderados como quisieran unirse a ellos*". Cuando el embajador preguntó si podrían hacer esto, Royo respondió 'en secreto': "*Tenía algunas dudas a este respecto*". Las dudas del presidente panameño posiblemente eran resultado directo de la pérdida de influencia de los gobiernos de Venezuela y Panamá sobre los sandinistas y el aumento de los contactos entre el FSLN y Cuba.

MÉXICO Y LA CONSPIRACIÓN SANDINISTA

El cambio de gobierno en Venezuela y la ratificación de los Tratados del Canal de Panamá, al igual que el fracaso de la mediación norteamericana permitieron que otros actores regionales preocupados por la crisis en Nicaragua como México y Cuba tuvieran mayor beligerancia en la situación. A final de noviembre de 1978, el gobierno mexicano había considerado que era necesario entablar contactos con el bloque anti-somocista, para coordinar sus esfuerzos en contra de la dictadura.

La embajada mexicana consideraba que entre las fuerzas de oposición sólo el Grupo de los 12 y los sandinistas tenían una “verdadera representatividad y apoyo popular”, y por lo tanto eran una fuerza legítima de oposición que la mediación norteamericana buscaba ignorar deliberadamente y hasta bloquear políticamente.

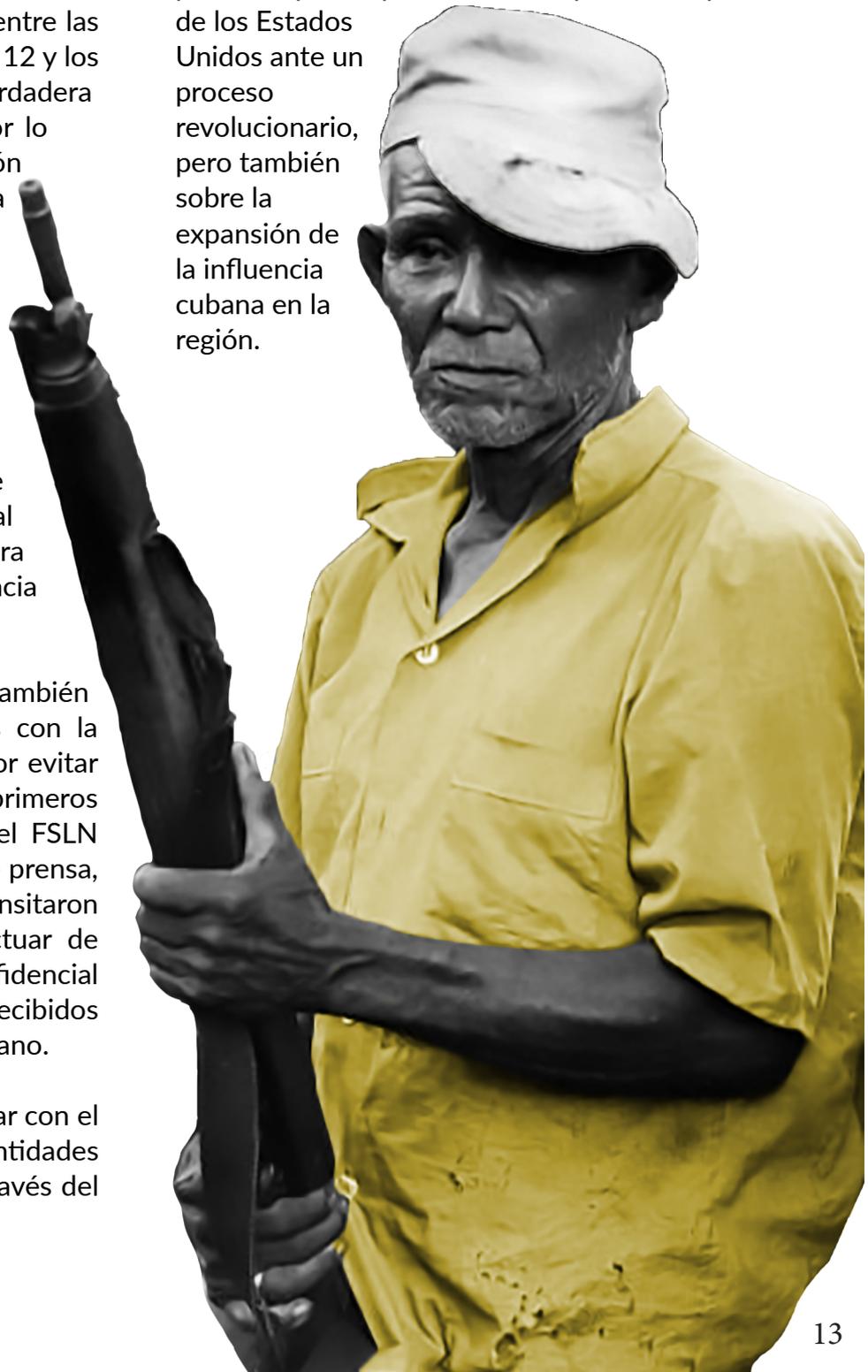
Gran parte de los esfuerzos diplomáticos del gobierno mexicano estuvieron encaminados a moderar los impulsos anticomunistas del gobierno norteamericano. El gobierno mexicano se mostró interesado en convencer al gobierno norteamericano, para que tomara una posición abiertamente crítica hacia Somoza.

El temor ante una posible ‘nueva Cuba’ también guió la política mexicana en sus tratos con la oposición nicaragüense, en un intento por evitar la radicalización del FSLN. Desde los primeros meses de 1979, diferentes miembros del FSLN viajaron a México, dieron conferencias de prensa, asistieron a eventos de solidaridad y transitaban libremente, sin necesidad alguna de actuar de forma clandestina. Además, de forma confidencial miembros del Grupo de los 12 fueron recibidos por altos funcionarios del gobierno mexicano.

El gobierno mexicano comenzó a colaborar con el Frente Sandinista entregando grandes cantidades de dinero para la lucha nicaragüense a través del PRI.

México expandió sus contactos con el Grupo de los 12, mientras decaía la influencia de Panamá y Venezuela, y aumentaba la influencia cubana sobre el conflicto.

El apoyo de México a los moderados dentro del movimiento sandinista buscaba permitir el desarrollo de una opción revolucionaria no radical que pudiera sustituir a Somoza, y contar con el apoyo del gobierno norteamericano. En el centro de esta política de Estado, se encontraba una profunda preocupación sobre la posible respuesta de los Estados Unidos ante un proceso revolucionario, pero también sobre la expansión de la influencia cubana en la región.



5. MÉXICO Y LA CONSPIRACIÓN SANDINISTA

El cambio de gobierno en Venezuela y la ratificación de los Tratados del Canal de Panamá, al igual que el fracaso de la mediación norteamericana permitieron que otros actores regionales preocupados por la crisis en Nicaragua como México y Cuba tuvieran mayor beligerancia en la situación.

El gobierno mexicano había visto con extrema preocupación los sucesos al Sur de su frontera, considerando que la crisis de la dictadura somocista estaba desestabilizando a la región y podía afectar los intereses regionales de México. Un informe del Departamento de Estado sobre la relación de seguridad México-Estados Unidos, señalaba: *"La actual agitación en Nicaragua también es preocupante para México, al igual que un deterioro en la situación interna de El Salvador"*.

A final de noviembre de 1978, el gobierno mexicano había considerado que era necesario entablar contactos con el bloque anti-somocista, para coordinar sus esfuerzos en contra de la dictadura. Un memorándum del 28 de noviembre señalaba al respecto que, en caso de producirse una victoria revolucionaria del FSLN, el gobierno mexicano debería *"coordinar una posición [...] con las de Venezuela, Panamá y Costa Rica, ya que el triunfo del Frente Sandinista a través de las armas tendría que producirse con el apoyo militar disfrazado de cualquiera o varios de estos tres países."* Más adelante sugería que *"Se considera importante que, a la brevedad posible, mediante una Misión Especial de la Cancillería Mexicana, se establezcan contactos directos con los líderes de estos tres países [Panamá, Venezuela y Costa Rica]"*. El memorándum señalaba que, a pesar de las muestras de apoyo mexicano al FSLN, cualquier triunfo revolucionario *"tendría que ser analizado en función de quienes lo integran y la filosofía política que lo respalda"*, una clara alusión a los peligros y complicaciones inherentes de reconocer un gobierno revolucionario en Nicaragua.

La posición del gobierno mexicano frente a los sucesos en Centroamérica, estaba directamente vinculada con las decisiones de Washington hacia Nicaragua. El 2 de febrero, el embajador de México en Nicaragua, Gustavo Iruegas, envió un informe largo sobre la situación política en el país, otorgando especial énfasis al papel de los Estados Unidos en la región. En su reporte Iruegas escribió que: *"El procedimiento de la mediación parece estar prácticamente agotado y no se ven muchas otras posibilidades de derrocar a Somoza y conservar el somocismo y la presencia estadounidense en Nicaragua, aparte de un posible golpe de Estado."* Más adelante, el embajador de México caracterizó el esfuerzo de mediación como un *"fallido intento que los Estados Unidos hicieron de retomar el control de la política en Nicaragua [...] que no mostró nunca los primeros síntomas de viabilidad."* La embajada mexicana consideraba que entre las fuerzas de oposición sólo el Grupo de los 12 y los sandinistas tenían una "verdadera representatividad y apoyo popular", y por lo tanto eran una fuerza legítima de oposición que la mediación norteamericana buscaba ignorar deliberadamente y hasta bloquear políticamente. El centro del análisis del gobierno mexicano tenía que ver con su preocupación por las consecuencias regionales de la obstinada posición de los Estados Unidos, frente al desarrollo 'inevitable' y 'natural' de un movimiento revolucionario.

Gran parte de los esfuerzos diplomáticos del gobierno mexicano estuvieron encaminados a moderar los impulsos anticomunistas del gobierno norteamericano, y su aparente temor irracional de los movimientos revolucionarios. El 22 de abril el secretario de Relaciones Exteriores de México, Santiago Roel, se entrevistó con el embajador norteamericano en México, Patrick Lucey, quien informó al Departamento de Estado: Roel le informó al embajador que una delegación de la 'oposición' viajaría a México y que será conveniente que se reuniera con ellos. El embajador se negó a entrevistarse con aquellos miembros de la oposición (posiblemente miembros del Grupo de los 12) ya que necesitaba aprobación de Washington.

El gobierno mexicano se mostró interesado en convencer al gobierno norteamericano, para que tomara una posición abiertamente crítica hacia Somoza. El 23 de abril, un documento de análisis sobre las posibles consecuencias de una ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Nicaragua, elaborado por la cancillería señalaba: *"Parece ser lamentablemente cierto que, si Estados Unidos no lo desea, Somoza no abandonará el Gobierno, o en caso de suceder esto, el grupo en el poder no modificará sustancialmente su"*

actitud al ejercer éste (otra Cuba no es posible en América Latina)”. Esta visión excesivamente centrada en el poderío norteamericano no reflejaba la realidad de la administración Carter, paralizada por el fracaso de su esfuerzo fallido de mediación.

El temor ante una posible ‘nueva Cuba’ también guio la política mexicana en sus tratos con la oposición nicaragüense, en un intento por evitar la radicalización del FSLN. Desde los primeros meses de 1979, diferentes miembros del FSLN viajaron a México, dieron conferencias de prensa, asistieron a eventos de solidaridad y transitaron libremente, sin necesidad alguna de actuar de forma clandestina. Además, de forma confidencial miembros del Grupo de los 12 fueron recibidos por altos funcionarios del gobierno mexicano. El 9 de marzo, se entrevistaron con el secretario de gobernación, Jesús Reyes Heróles, y posteriormente con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo Carvajal Moreno. Ambos eran importantes figuras de la política mexicana.

El gobierno mexicano comenzó a colaborar con el Frente Sandinista entregando grandes cantidades de dinero para la lucha nicaragüense a través del PRI. México expandió sus contactos con el Grupo de los 12, mientras decaía la influencia de Panamá y Venezuela, y aumentaba la influencia cubana sobre el conflicto, y no es descabellado considerar que los sandinistas buscaran estrechar sus lazos con el gobierno mexicano por la limitación del apoyo venezolano y panameño. Documentos internos del FSLN, también permiten añadir más información sobre el apoyo de México a los sandinistas. De acuerdo con varias fichas de incorporación de nuevos combatientes del FSLN en Panamá, en algunas ocasiones nicaragüenses que se habían asilado en la embajada de México en Managua habían sido trasladados a México y, desde allí, la Secretaría de Gobernación había pagado sus pasajes rumbo a Panamá. Era ampliamente conocido que Panamá era un centro de actividad sandinista y era probable que estos militantes, una vez en el país, se unieran nuevamente a la lucha.

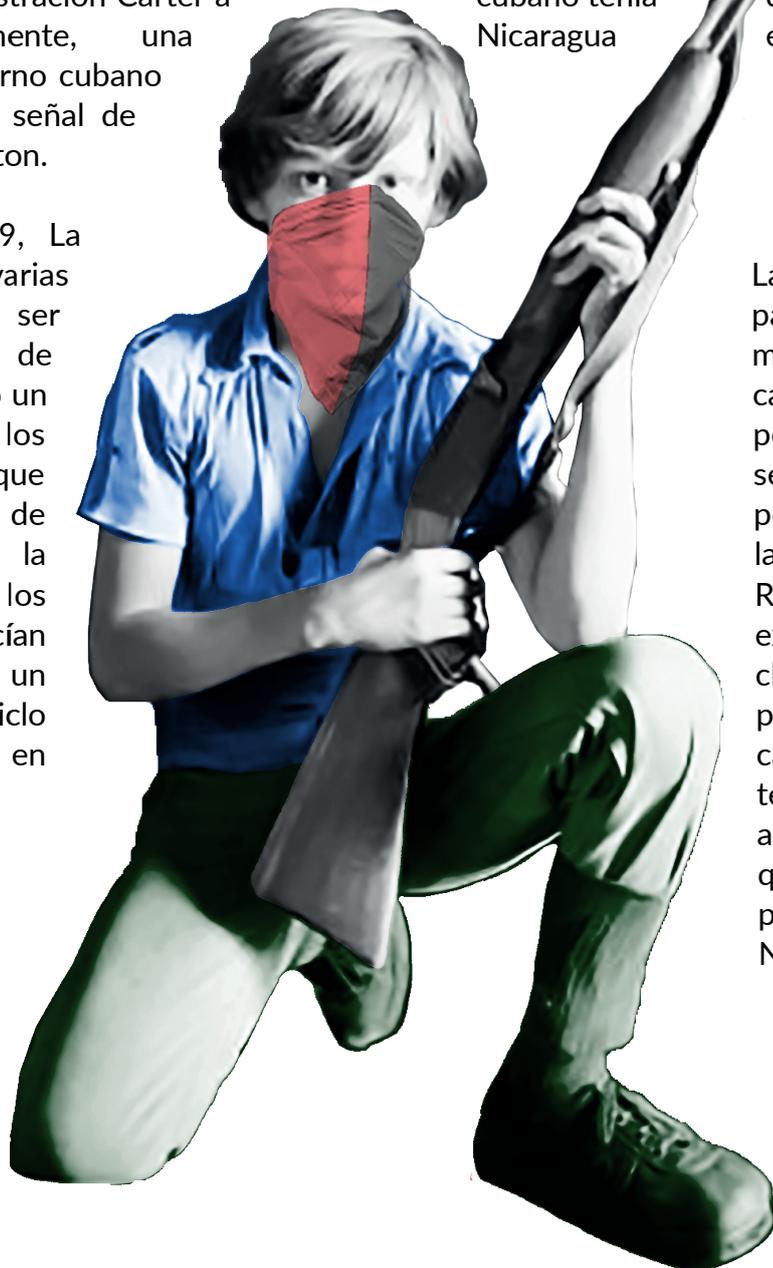
El apoyo de México a los moderados dentro del movimiento sandinista buscaba permitir el desarrollo de una opción revolucionaria no radical que pudiera sustituir a Somoza, y contar con el apoyo del gobierno norteamericano. En el centro de esta política de Estado, se encontraba una profunda preocupación sobre la posible respuesta de los Estados Unidos ante un proceso revolucionario, pero también sobre la expansión de la influencia cubana en la región.

CUBA Y LA SITUACIÓN REGIONAL

Para diciembre de 1978, el escenario político internacional que había mantenido a Cuba fuera del conflicto había cambiado de forma significativa. El fin de la presidencia de Carlos Andrés Pérez, el colapso de las negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos, así como la probada capacidad del FSLN de movilizar a la población nicaraguense, representaron para el gobierno cubano una nueva oportunidad de expandir la revolución y su influencia a nivel regional, y revivir los postulados guevaristas de liberación continental.

La capacidad de movilización popular del FSLN y el espíritu combativo del pueblo de Nicaragua impresionó al gobierno cubano. El fracaso de la mediación norteamericana evidenció la renuncia de la administración Carter a intervenir militarmente, una posición que el gobierno cubano interpretó como una señal de debilidad de Washington.

A principio de 1979, La Habana tenía varias razones para ser optimista: la retirada de Pérez había permitido un mayor contacto con los sandinistas, mientras que el ánimo combativo de los nicaragüenses y la aparente debilidad de los Estados Unidos parecían indicar el inicio de un nuevo ciclo revolucionario en Centroamérica.



El reflejo más claro de esta transformación latinoamericana era el apoyo de Venezuela, Costa Rica y Panamá a la lucha sandinista. La colaboración de estos países podía minimizar el riesgo diplomático de una acción encubierta cubana a favor de los guerrilleros sandinistas, a diferencia de las operaciones clandestinas que La Habana había llevado a cabo durante los años sesenta.

Durante meses, Venezuela, Panamá y Costa Rica habían intentado limitar la influencia de Cuba en el conflicto, indicando una y otra vez a oficiales norteamericanos su temor ante una posible amenaza cubana en Centroamérica. El primer paso, que el gobierno cubano tenía que tomar para intervenir en Nicaragua era vencer la reticencia de los países latinoamericanos frente a las verdaderas intenciones de Cuba hacia Nicaragua.

La incapacidad de Venezuela para proporcionar ayuda militar a Costa Rica, tras el cambio de gobierno, había permitido que este vacío de seguridad fuera aprovechado por Fidel Castro para estrechar lazos con el gobierno de Rodrigo Carazo, y permitió la expansión de la presencia clandestina sandinista en el país. Este suceso tuvo como causa común la defensa territorial de Costa Rica frente a las amenazas Somocistas, que el gobierno cubano utilizó para apoyar la lucha en Nicaragua.

6. CUBA Y LA SITUACIÓN REGIONAL

A finales de enero de 1979, un informe de la CIA sobre la situación en Nicaragua indicaba de forma profética: *"Aunque sólo sea por defecto, el papel de Cuba se volverá más importante a finales de este año. Después de que Pérez deje el cargo, los guerrilleros serán más propensos a mirar a Castro, quien en todo momento ha aconsejado la movilización para la lucha a largo plazo [...]"*. A pesar de esta evaluación, el análisis de la CIA consideraba que era poco probable que Fidel Castro interviniera 'directamente' en el conflicto, ya que no estaba dispuesto a arriesgar una confrontación directa con los Estados Unidos para librar una guerra de guerrillas en América Latina.

Esta complacencia norteamericana estaba basada sobre un supuesto de que la crisis en Nicaragua no había modificado profundamente la situación regional. Para diciembre de 1978, el escenario político internacional que había mantenido a Cuba fuera del conflicto había cambiado de forma significativa. El fin de la presidencia de Carlos Andrés Pérez, el colapso de las negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y la probada capacidad del FSLN de movilizar a la población de Nicaragua representaron para el gobierno cubano una nueva oportunidad de expandir la revolución y su influencia a nivel regional, y revivir los postulados guevaristas de liberación continental.

La capacidad de movilización popular del FSLN y el espíritu combativo del pueblo de Nicaragua impresionó al gobierno cubano. Varios oficiales cubanos remarcaron, desde finales de 1978, que se encontraban optimistas para el futuro de la lucha sandinista. Ulises Estrada, del Departamento América, señaló que la violencia continuaría en Nicaragua hasta que los sandinistas fueran incluidos en un nuevo gobierno post-somoza, ya que en caso de no hacerlo combatirían "hasta la última bala." El fracaso de la mediación norteamericana evidenció la renuncia de la administración Carter a intervenir militarmente en los asuntos nicaragüenses, una posición que el gobierno cubano interpretó como una señal de debilidad de Washington.

A finales de 1978, Ulises Estrada, segundo al mando del Departamento América, había indicado, mitad en broma y mitad en serio, al encargado de negocios de los Estados Unidos en La Habana que el gobierno cubano consideraba poco probable que la administración Carter estuviera dispuesta a tomar medidas abiertamente intervencionistas en contra de Somoza o de los insurrectos, ya que los países de la región estaban dispuestos a mostrar cada vez más independencia frente a Washington, y se mostrarían profundamente críticos frente a cualquier acción norteamericana. De acuerdo con Estrada, sólo una intervención armada podía detener el triunfo sandinista, pero esto llevaría a distanciarse de gobiernos nacionalistas de la región.

La aseveración cubana debía ser matizada, ya que mientras gobiernos como Honduras y México se mostraron profundamente escépticos frente a una intervención norteamericana, otros países como Venezuela, habían intentado organizar una misión similar. Estas señales alentadoras coincidieron con el colapso de las pláticas secretas entre el gobierno de Cuba y los Estados Unidos para normalizar las relaciones bilaterales. Como algunos historiadores han señalado, para diciembre de 1978, las pláticas bilaterales que habían comenzado con cierto optimismo llegaron a un punto muerto. Durante meses Brenzinski, director del National Security Council, había intentado llevar a cabo una diplomacia agresiva que buscó en todo momento condicionar el fin del embargo económico norteamericano con la retirada de la misión militar cubana en Angola.

El gobierno cubano se negó absolutamente a estas condiciones. Las pláticas fueron obstaculizadas aún más por el 'descubrimiento' por parte de la inteligencia norteamericana de una brigada soviética en Cuba. En los Estados Unidos, este hecho causó un profundo escándalo y llevó a que varios importantes políticos demandaran su retirada. Este incidente causó profunda sorpresa en Cuba ya que ese contingente militar había estado en la isla desde los años sesenta.

El impasse en torno a Angola, y el innecesario escándalo enfriaron el optimismo inicialmente ocasionado por la llegada de Carter a la presidencia. El colapso de las pláticas, durante esta coyuntura política, fue particularmente importante ya que eliminó uno de los obstáculos más importantes para aumentar la presencia cubana en Centroamérica.

A principio de 1979, La Habana tenía varias razones para ser optimista: la retirada de Pérez había permitido un mayor contacto con los sandinistas, mientras que el ánimo combativo de los nicaragüenses y la aparente debilidad de los Estados Unidos parecían indicar el inicio de un nuevo ciclo revolucionario en Centroamérica. De acuerdo con documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bulgaria, el 9 de abril, Fidel Castro se entrevistó con el líder del Partido Comunista de Bulgaria, Todor Zhivkov, y durante la conversación, Castro indicó su optimismo con respecto a la situación revolucionaria en América Latina. Reconoció que desde la revolución cubana el "proceso político y social", no se había desarrollado tan rápido y exitosamente como él había esperado, sin embargo, estaba convencido de que las siguientes dos décadas habría importantes cambios en América Latina, como lo mostraban la "inevitable" caída de Somoza, y la victoria revolucionaria en Granada. Durante su conversación, Castro puso especial énfasis en la colaboración de países como Panamá que calificó como 'sumamente positivo' ya que marcaba el surgimiento por toda la región, de gobiernos nacionalistas independientes de Washington.

El reflejo más claro de esta transformación latinoamericana era el apoyo de Venezuela, Costa Rica y Panamá a la lucha sandinista. La colaboración de estos países podía minimizar el riesgo diplomático y político de una acción encubierta cubana a favor de los guerrilleros sandinistas, a diferencia de las operaciones clandestinas que La Habana había llevado a cabo durante los años sesenta. Sin embargo, estos países también podían ser un obstáculo para los intereses cubanos. Durante meses, Pérez, Torrijos y Carazo habían intentado limitar la influencia de Cuba en el conflicto, indicando una y otra vez a oficiales norteamericanos su temor ante una posible amenaza cubana en Centroamérica. El primer paso, que el gobierno cubano tenía que tomar para intervenir en Nicaragua era vencer la reticencia y sospechas de los países latinoamericanos frente a las verdaderas intenciones de Cuba hacia Nicaragua. Las amenazas de Nicaragua impulsaron las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Cuba.

Fidel Castro, relata en su libro *La paz en Colombia*, que a finales de 1978 el gobierno venezolano había solicitado a Cuba enviar armamento antiaéreo a Costa Rica: "*Carlos Andrés hasta nos había solicitado cohetes antiaéreos para proteger a Costa Rica de la aviación militar de Somoza. Nuestra disposición fue la de apoyar a Costa Rica con armas antiaéreas [no cohetes].*" El Gobierno de Costa Rica declaró públicamente que estas armas, conocidas popularmente como 'cuatro bocas', habían sido prestadas por el Gobierno de Panamá; sin embargo, declaraciones de pilotos costarricenses recabadas por el Congreso de Costa Rica, y testimonios posteriores del exministro de Seguridad, Echeverría Brealey, confirmaron que este armamento provenía en realidad de La Habana.

La incapacidad de Venezuela para proporcionar ayuda militar a Costa Rica, tras el cambio de gobierno, había permitido que este vacío de seguridad fuera aprovechado por Fidel Castro para estrechar lazos con el gobierno de Rodrigo Carazo, y permitió la expansión de la presencia clandestina sandinista en el país. Este suceso tuvo como causa común la defensa territorial de Costa Rica frente a las amenazas Somocistas, que el gobierno cubano utilizó para apoyar la lucha en Nicaragua.

LA GUERRA SECRETA EN CENTROAMÉRICA

El apoyo cubano fue fundamental en la reconstitución armamentística del FSLN. Mientras que la dictadura parecía cada vez más fortalecida, el Frente Sandinista se encontraba en un periodo de reorganización político y militar.

A principios de marzo, los líderes sandinistas viajaron a La Habana para llegar a un nuevo acuerdo de unidad ya que los acuerdos anteriores, firmados a mediados de 1978, no habían sido respetados por ninguna de las partes.

Durante las negociaciones, las fracciones Proletaria y GPP buscaron conseguir una representación paritaria dentro de una nueva Dirección Nacional unificada en relación a los terceristas, quienes contaban con la mayor cantidad de militantes, armamento y apoyo internacional.

Los terceristas tuvieron que ceder en cuanto a representación política y aceptaron conformar una Dirección Nacional compuesta por 3 miembros de cada tendencia, a pesar de la diferencia de fuerzas entre las tres tendencias.

A cambio de la unidad, el gobierno cubano había indicado que estaría dispuesto a aumentar considerablemente su apoyo a la organización suministrando armamento, municiones y dinero para promover la lucha contra Somoza.

El 8 de marzo, la nueva Dirección Nacional conjunta del FSLN anunció públicamente su unificación en un manifiesto que fue ampliamente circulado en los medios de comunicación. La fotografía de los nueve líderes sandinistas marcaría oficialmente el inicio de los preparativos para la Ofensiva Final.



7. LA GUERRA SECRETA EN CENTROAMÉRICA

El apoyo cubano fue fundamental en la reconstitución armamentística del FSLN. Mientras que la dictadura parecía cada vez más fortalecida, el Frente Sandinista se encontraba en un periodo de reorganización político y militar.

A principios de 1979, la Dirección Nacional Tercerista envió un mensaje confidencial para el Frente Norte. Se trata de uno de los pocos documentos internos del FSLN de ese periodo consultable y es una de nuestras mejores fuentes para comprender la situación interna de la organización, tras la insurrección de septiembre. Entre otros elementos, la carta abordaba varios problemas relacionados con la organización, en particular la falta de recursos materiales: *"Aunque seguiremos haciendo lo posible por conseguir armas por otras vías, nuestra principal fuente de abastecimiento bélico deberá ser la propia soldadesca somocista."* Esta situación era el reflejo de la negativa de Venezuela y Panamá de proporcionar ayuda directa a la organización a partir de enero de 1979.

La carta también mostraba sospecha frente a los aliados internacionales del sandinismo al recomendar utilizar la ayuda internacional, para fortalecer su control sobre el descontento popular: *"sigamos recogiendo el apoyo de la burguesía internacional que se opone a Somoza e inteligentemente ocupemos tal apoyo en la defensa y fortalecimientos de los soportes que garanticen que la revolución no se mediatice o se desvíe: o sea fortaleciendo nuestra hegemonía política y moral sandinista sobre las amplias masas."*

La Dirección Nacional Tercerista se veía en la necesidad de defender y justificar su posición. La insistencia tercerista sobre la necesidad de adquirir formas moderadas para la lucha, era una explicación para aquellos combatientes que habían expresado dudas frente a la estrategia insurreccional. Las fricciones dentro de Tercerismo había llevado a la organización ante nuevas contradicciones, a principio de 1979, se volvió indispensable convocar una reunión con todos los principales dirigentes para solucionar las diferencias.

A finales de enero de 1979, los principales líderes insurreccionales se reunieron en la base militar de Río Ható, en Panamá, bajo la mirada vigilante de Omar Torrijos. Los que estuvieron presentes en el llamado "Congresito" expresaron que fue "una reunión cargada de mucha tensión." El propósito principal del cónclave era evitar una división al interior del Tercerismo y lograr coordinar los planes para una nueva insurrección nacional. Recuerda uno de los presentes que durante varios días los miembros de la Dirección Nacional, *"haciendo gala de mucha paciencia e inteligencia"* lograron convencer a los diferentes líderes terceristas aceptar la política de alianzas con la burguesía, rechazar la ampliación de la dirigencia y coordinar el plan general para la futura insurrección nacional. Las conversaciones fueron exitosas y el 6 de febrero se aprobó una "circular interna" que formalizaba estos acuerdos y que, además, se planteaba los pasos hacia la ofensiva "final".

Durante la reunión, Omar Torrijos, invitó a los principales dirigentes del Tercerismo a su residencia privada frente al Mar Caribe, para escuchar de primera mano cuál era la situación del FSLN dentro de Nicaragua. Los sandinistas remarcaron en varias ocasiones la necesidad de reanudar el apoyo militar de Panamá, para la lucha al interior de Nicaragua. Durante esta conversación, Torrijos, de forma un tanto renuente, pero entusiasmado por la emotividad de los combatientes sandinistas, aceptó proporcionar algún armamento para la lucha sandinista pero esta ayuda posiblemente fue poco sustancial por la complicada situación política del país. Como se había visto, el gobierno de Panamá estaba siendo presionado por los Estados Unidos para distanciarse de la situación en Nicaragua o arriesgar la implementación de los tratados del Canal de Panamá.

Durante las conversaciones en Panamá, los sandinistas recibieron una invitación por parte del Comandante Fidel Castro, para discutir la posible unificación de las diferentes tendencias del FSLN en Cuba. A principios de marzo, los líderes sandinistas viajaron a La Habana para llegar a un nuevo acuerdo de unidad ya que los acuerdos anteriores, firmados a mediados de 1978, no habían sido respetados por ninguna de las partes. Las pláticas contaron con la presencia de Fidel Castro, y de altos miembros del Departamento América, y fueron tensas porque había diferencias ideológicas sobre el problema de la política de alianzas y por

cuestiones de orden táctico sobre la mejor forma de conducir la revolución. Durante las negociaciones, las fracciones Proletaria y GPP buscaron conseguir una representación paritaria dentro de una nueva Dirección Nacional unificada en detrimento de los terceristas, quienes contaban con la mayor cantidad de militantes, armamento y apoyo internacional.

A pesar de la reticencia de todos los líderes sandinistas había varias fuerzas que favorecían la unidad de las tendencias: dentro de Nicaragua, tras el colapso de la mediación, la coyuntura política parecía favorecer a Somoza; mientras tanto, la elección presidencial en Venezuela había bloqueado el principal apoyo político, económico y militar del Tercerismo. A cambio de la unidad, el gobierno cubano había indicado que estaría dispuesto a aumentar considerablemente su apoyo a la organización suministrando armamento, municiones y dinero para promover la lucha contra Somoza. La política norteamericana fue otro elemento particularmente importante que durante las negociaciones en Cuba favoreció la reunificación de las tres tendencias sandinistas. Para 1979, el ex-gobernador de California, Ronald Reagan, se había alzado como el principal contendiente de oposición a la presidencia norteamericana gracias a un discurso radical anticomunista.

La posible victoria de Reagan indicaba que Washington habría podido reanudar su apoyo a la dictadura.

Tras cuatro días y más de 48 horas de negociaciones, se lograron llegar a varios acuerdos importantes. En cuanto a la estrategia a seguir, los terceristas junto con el gobierno cubano lograron convencer a las otras tendencias sobre la necesidad de continuar con una política de alianzas con la burguesía. De acuerdo con documentos de inteligencia norteamericanos, Castro enfatizó la necesidad de limitar la "naturaleza" marxista de la organización y conformar una coalición amplia con estrategias pragmáticas, para minimizar la respuesta anticomunista regional. Los terceristas tuvieron que ceder en cuanto a representación política y aceptaron conformar una Dirección Nacional unificada compuesta por 3 miembros de cada tendencia sandinista, a pesar de la diferencia de fuerzas entre las tres organizaciones. No obstante, los acuerdos formales, el gobierno cubano decidió canalizar su apoyo material a través de la facción tercerista, otorgándole mayor poder y control político sobre la insurrección.

Tras las reuniones en Cuba, los nueve miembros de la Dirección Nacional fueron fotografiados en San José por un profesional, vestidos de civiles, con las manos alzadas, mostrando la nueva unidad del FSLN. El 8 de marzo, la nueva Dirección Nacional conjunta del FSLN anunció públicamente su unificación en un manifiesto que fue ampliamente circulado en los medios de comunicación. La fotografía de los nueve líderes sandinistas marcaría oficialmente el inicio de los preparativos para la Ofensiva Final. Los acuerdos de unidad del FSLN, en marzo de 1979, llevaron a un momento de reconfiguración de las estructuras clandestinas y de la estrategia revolucionaria.

El apoyo cubano tras la unificación del Frente Sandinista no fue avasallador, como gran parte de la historiografía ha señalado, de hecho, en un principio, fue particularmente limitado. Documentos de inteligencia norteamericanos señalaban a principios de mayo que el gobierno cubano estaba intentando desarrollar una estrategia de lucha prolongada en Centroamérica: *"Los dirigentes cubanos comparten la creencia de las facciones de la Guerra Popular Prolongada y de la Tendencia Proletaria de que es probable que los sandinistas alcancen el poder sólo después de una lucha prolongada"*. La CIA tenía información que, desde septiembre de 1978, Fidel Castro había aconsejado en varias ocasiones a los dirigentes sandinistas abstenerse de realizar operaciones militares directas en contra del Somocismo: *"Por lo tanto, es probable que el apoyo cubano siga destinado a ayudar a los sandinistas a que desarrollen la infraestructura militar y política necesaria para triunfar en una guerra de desgaste. Los cubanos probablemente esperan que -como ocurrió con el ejército de Batista- el sentimiento popular gradualmente se vuelva contra la Guardia y finalmente cambie los equilibrios de la balanza."*

El documento también indicaba que en enero dos oficiales de la Embajada cubana en Panamá, habían indicado que el gobierno de la isla no consideraba que los sandinistas lograrían derrotar a Somoza antes de 1981. La estrategia que el gobierno cubano buscaba seguir con el FSLN era similar a la utilizada para derrotar a Batista veinte años antes.

Se trataba de una diferencia sustancial con los postulados Terceristas que, en cambio, favorecían acciones armadas de gran impacto. Mientras que el gobierno cubano había decidido apoyar una lucha a 'largo plazo' similar a la GPP, había decidido canalizar la mayor parte de su ayuda militar a través de los Terceristas.

Las razones detrás de esta decisión no son del todo claras. Para 1979, los Terceristas eran la facción sandinista más fuerte y con una mayor 'infraestructura', particularmente en Costa Rica, donde gozaban del respaldo de importantes fuerzas políticas. En 1978, la inteligencia cubana había considerado que era 'inviabile' utilizar la ruta del atlántico para armar a los sandinistas por lo que Costa Rica era la única vía, ya que la GPP y los Proletarios no contaban con una extensa infraestructura en Costa Rica, tenían que depender, en cierta forma, de las redes terceristas para su aprovisionamiento. A pesar de que Castro buscaba una estrategia militar más cercana a la GPP, en lo político el gobierno cubano había indicado su respaldo por la estrategia de alianzas Tercerista.

Finalmente, los Terceristas también habían sido favorecidos por los gobiernos de Panamá y Venezuela durante 1978, y es posible que el gobierno cubano intentara reducir la influencia de aquellos gobiernos sobre los Terceristas. Desde la firma de los acuerdos de unidad, el gobierno cubano se enfocó en fortalecer las capacidades logísticas y operativas del FSLN, con el propósito de sostener operaciones a largo plazo. El Departamento de América ayudó a mejorar el puesto de mando sandinista en San José: "Palo Alto". En este lugar los sandinistas habían utilizado una serie de edificios para montar el núcleo de sus operaciones clandestinas. En 1980 Trejos rindió declaraciones ante el Organismo de Investigaciones Judiciales de Costa Rica, en el marco de una investigación relacionada con el trasiego de armas durante el conflicto en Nicaragua.

La estación de comunicaciones aumentó la capacidad de coordinación del FSLN. En Palo Alto, el FSLN mantenía contacto con funcionarios del gobierno de Costa Rica y con algunos colaboradores costarricenses. El complejo de edificios servía además como un depósito de armas. Desde finales de 1978, el gobierno cubano había alentado a los grupos guerrilleros latinoamericanos a colaborar con los sandinistas. Sin embargo, a partir de la firma de los acuerdos, el número de internacionalistas aumentó. Estos voluntarios actuaban como militantes especializados en alguna rama técnica-guerrillera, operando comunicaciones, morteros, explosivos etc.

De acuerdo con testimonios de colaboradores costarricenses, a finales de 1978, militantes argentinos de los Montoneros, así como fuerzas políticas de izquierda como el MIR y el Partido Comunista de Chile habían decidido colaborar con los sandinistas, sirviendo también como enlace entre el gobierno cubano, los sandinistas en Cosa Rica y grupos civiles en el país. El propio Omar Torrijos, durante una conversación con el embajador norteamericano, había informado al gobierno norteamericano que los Montoneros y grupos salvadoreños proporcionaban grandes cantidades de ayuda militar a los sandinistas. Este apoyo, formaba parte de un esfuerzo realizado bajo la influencia y coordinación del gobierno revolucionario cubano. El gobierno de Cuba también aceleró la instrucción militar de guerrilleros en la isla. De acuerdo con documentos de inteligencia norteamericanos, para mediados de abril, al menos 300 combatientes nicaragüenses habían recibido entrenamiento militar en Cuba. De acuerdo con testimonio de militantes costarricenses del Partido Vanguardia Popular, al menos un contingente de costarricenses viajó a la isla para realizar un riguroso entrenamiento guerrillero, los cuales regresaron hasta el mes de junio. Este entrenamiento también había sido extendido a otros grupos centroamericanos: guatemaltecos y salvadoreños, ya que el gobierno de La Habana consideraba que los sucesos en Nicaragua eran parte de un proceso regional más amplio, que vaticinaba revoluciones en los demás países autoritarios de la región. A pesar del apoyo logístico, el gobierno cubano mantuvo un apoyo militar limitado a la guerrilla sandinista. Un informe de la CIA elaborado a principios de mayo de 1979, señalaba que Cuba sólo había proporcionado un cargamento de armas vía Panamá, que contenía armamentos antitanques, así como munición para morteros.

Esta ayuda era esencial para mantener viva la Insurrección en Nicaragua, pero era mucho menos de lo que el gobierno de la isla podía proporcionar a los sandinistas. Todo indica que el armamento había sido cuidadosamente seleccionado para no incitar sospechas de una gran conspiración. El gobierno cubano evitó enviar armas procedentes de países comunistas, proporcionando sólo equipo que podía ser confundido con el apoyo proveniente de Panamá y Venezuela.

El gobierno cubano mantenía tratos con la Unión Soviética, que impedían que armas producidas por ellos fueran proporcionadas a terceros. La transferencia de armas soviéticas a los guerrilleros había mermado las reservas en los arsenales cubanos, lo que llevó a Castro a buscar ayuda de otros países comunistas. De acuerdo con documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bulgaria, el 9 de abril, Fidel Castro, se entrevistó con el presidente búlgaro, Todor Zhivkov, a quien informó que el gobierno de Vietnam había proporcionado alrededor de 600 armas norteamericanas capturadas tras la guerra, ofrecidas para ser entregadas a los sandinistas.

Durante su conversación, Castro pidió al gobierno de Bulgaria que proporcionara armamento occidental o soviético, siempre y cuando no tuvieran "marcas de manufactura" para apoyar el esfuerzo revolucionario en América Latina. La ayuda y el flujo de armas procedente de Cuba permitieron a los sandinistas incorporar nuevas y numerosos reclutas, para alimentar sus esfuerzos de reorganización militar. Tras la insurrección de septiembre, grandes contingentes de simpatizantes y combatientes populares siguieron a los guerrilleros sandinistas a las montañas.

Al respecto un guerrillero que había participado en la Insurrección de Septiembre relata: *"En el primer campamento que tuvimos en el sur de Estelí, éramos aproximadamente ciento ochenta, incluyendo muchas mujeres. [...] El resto de los campamentos eran masivos. Era necesario matar una res cada tres días para darle de comer a la gente. También comprábamos arroz, pero no en libras, sino en quintales."*

La estimación de la CIA era que en junio de 1979 había entre 3,000 a 4,000 guerrilleros sandinistas. La mayoría eran nuevos reclutas, unidos a la organización desde septiembre de 1978. La represión desatada por la Guardia Nacional durante la ofensiva de septiembre generó miles de refugiados en particular jóvenes que huyeron de las operaciones de "limpieza" de la guardia somocista. Dentro de Nicaragua y en los países vecinos, estos jóvenes se unieron al Frente Sandinista para luchar en contra de Somoza, motivados en gran medida por un sentimiento de rebeldía e indignación ante las vejaciones sufridas a manos de la dictadura.

En Panamá, uno de estos jóvenes desplazados, explicó las razones por las cuales deseaba unirse al FSLN: "Siento como todo nicaragüense lo que pasa a nuestro pueblo. Es un deber mío estar al lado del pueblo. Mi conciencia me reclama diariamente mi obligación de estar al lado del pueblo en la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Deseo regresar porque quiero ser un hombre completo, un revolucionario sandinista". Estos jóvenes, desplazados y vejados por la dictadura, fueron la base del nuevo ejército guerrillero sandinista. Ya equipado con armas que ya no solo provenían de Venezuela y Panamá, sino también de Cuba, los sandinistas se encontraban preparados para lanzarse una vez más a la insurrección.

8. CONCLUSIONES

Como se ha estudiado anteriormente, la historiografía de la crisis de los años de 1977 y 1979 en Nicaragua ha mostrado una fuerte tendencia a centrar la problemática en las decisiones tomadas por Washington. A pesar de que no se puede negar este aspecto, hemos argumentado que la política latinoamericana tuvo un alto nivel de beligerancia en este contexto.

En esta unidad que abarca principalmente el periodo comprendido entre el febrero y mayo de 1979 es de suma importancia, comprender la participación de otros actores políticos, para entender el abrupto desenlace revolucionario de los meses posteriores. Contradictoriamente los meses entre febrero y mayo, constituyen un periodo que la mayoría de los estudios norteamericanos han caracterizado como de 'calma' o 'falta de acción'.

Sin embargo, en América Latina, este fue un periodo en el que se manifestaron tres procesos paralelos que redefinieron la situación política en Centroamérica: la entrada de Cuba y México en el conflicto; que compensó el debilitamiento de Venezuela y Panamá como actores centrales del proceso; y por ende el progresivo fortalecimiento del Frente Sandinista después de septiembre 1978.

Al estudiar este proceso, desde una perspectiva latinoamericana, es posible proponer una nueva periodización de la insurrección en el que este periodo adquiere una importancia principalmente para comprender el desarrollo posterior del proceso armado.

De acuerdo con este proceso reconstructivo, el colapso de la mediación norteamericana en enero de 1979 llevó a una reconfiguración de la esfera política latinoamericana, que implicó a su vez el rol beligerante de los actores mencionados, sentando las bases desde una perspectiva externa, que permitió coadyuvar en el desarrollo de la Ofensiva Final del FSLN, entre los meses de mayo y julio de 1979.

9. REFERENCIAS

- Nicaragua III 6225-1 3a parte, Memorándum para información Superior, Secretaría de Relaciones Exteriores, 20 de abril de 1979.
- SIERAKOWSKI, In the footsteps of Sandino: geographies of revolution and political violence in northern Nicaragua, 1956-1979, p. 200.
- CIA, Policy Review Committee Meeting on Nicaragua, 26 de enero de 1978, CIA-RDP81B00401R002000100001-1.
- "Shipment of military vehicles to Nicaragua" Telegrama del Departamento de Estado a la embajada norteamericana en Bonn, 2 de marzo de 1979, 1979STATE050603.
- CIA, Latin America Review, 15 de marzo de 1979, CIA-RDP79T0091A001000010021-5.
- Somoza's may day speech" Telegrama de la embajada norteamericana en Managua al Departamento de Estado, 2 de mayo de 1979, 1979MANAGU 01988.
- "Analysis of the 'white hand' existence" Telegrama de la embajada norteamericana en Managua al Departamento de Estado, 12 de febrero de 1979. 1979MANAGU00753,
- "Coup plotting continues" Telegrama de la embajada norteamericana en Managua al Departamento de Estado, 5 de febrero de 1979, 1979MANAGU00620.
- Entry 14, Box 55, Records of Warren Christopher, IX, "Pre-Briefing for PRC on Nicaragua" Memorándum de John A. Bushnell, ARA, al Subsecretario de Estado, Warren Christopher, 23 de enero de 1979.
- LAKE, Somoza Falling. A case study of Washington at Work, University of Massachusetts Press, 1989, p. 211.
- Memorándum from Robert Pastor of the National Security Council to the President's Assistant for National Security Affairs (Brezinski) 26 de enero de 1979, Foreign Relations of the United States 1977-1980; Volume XV; Central America, 1977-1980, no. 194.
- "Nicaragua: another talk with president Perez", Telegrama de la embajada norteamericana en Caracas al Departamento de Estado, 9 de febrero de 1979.
- "Reconvening of OAS seventeenth MFM", Telegrama del Departamento de Estado a la embajada norteamericana en Caracas, 3 de marzo de 1979, 1979STATE 052230.
- Memorandum from Robert Pastor of the National Security Council Staff to the President's Assistant for National Security Affairs (Brezinski), 13 de febrero de 1979, Foreign Relations of the United States 1977-1980; Volume XV; Central America, 1977-1980, no. 198.
- Comisión de Asuntos especiales, primera parte, informe sobre tráfico de armas, expediente 8768, Asamblea legislativa de Costa Rica, 1980, p. 11. Al ser de fabricación norteamericana, estos rifles necesitaban de un permiso especial para exportarlos a un tercer país.
- Entrevista realizada por Luis Suárez Salazar a Ulises estrada fundador DGLN del Ministerio del Interior de Cuba, y el

Departamento América del Partido Comunista, ESTRADA, "Cuba nunca dejó de brindar su apoyo solidario a todos lo que lo solicitaron" en SALAZAR, KRUIJIT, La revolución cubana en Nuestra América: el internacionalismo anónimo.

- USD, Departamento de Estado, "Briefing paper on U.S.-Mexican security relationships". Enero 1979.
- AGN, Dirección Federal de Seguridad, Comité de Solidaridad con Nicaragua y Frente Sandinista de Liberación Nacional, Legajo 2, Caja 276, 171, 1979, "XLV Aniversario de la muerte de Augusto César Sandino", 25 de febrero de 1979
- CIA, Policy Review Comitee Meeting on Nicaragua, 26 de enero de 1978, CIA-RDP81B00401R002000100001-1.
- "Cuban views on Nicaragua" Telegrama de la unidad de intereses norteamericanos en La Habana al Departamento de Estado, 30 de noviembre de 1978, 1978HAVANA03900.
- Central State Archive, Sofia, Fond 378-B, File 1140, Papka 7. Translated by Dr. Rositza Ishpekova, Edited by Dr. Jordan Baev. Obtained by the Bulgarian Cold War Research Group, revisado en el Wilson Center Digital Archive.
- CASTRO, Fidel. La paz en Colombia, p. 128.
- Comisión de asuntos especiales, Informe sobre tráfico de armas, Primera parte, expediente 8768, Asamblea Legislativa, San José, Costa Rica, 1980. p. 14. ECHEVERRÍA BREALEY, La guerra no declarada, p. 66
- "Conversation with congressman Jack Murphy", Telegrama de la embajada norteamericana en Panamá al Departamentp de Estado, 10 de enero de 1979. 1979PANAMA00243; TORRES, Rumbo Norte, p. 462.
- CIA, Memorándum, Cuban support for Central American Guerrilla Groups, 2 de mayo de 1979, Congressional Record, p. 11654.
- AGN-CR, Presidencial Rodrigo Carazo, signatura 2402, Declaración de Fernando Trejos al Organismo de Investigación Judicial, 21 de noviembre de 1980.
- "Cuban Support for Central American Guerrilla Groups", Memorandum, CIA, 2 de mayo de 1979. El texto citado proviene del Congressional Record del 19 de mayo de 1980, p.11654. Robert Pastor hace mención de este documento en su libro Condemned to repetition, 1987.
- Central State Archive, Sofia, Fond 378-B, File 1140, Papka 7. Translated by Dr. Rositza Ishpekova, Edited by Dr. Jordan Baev. Obtained by the Bulgarian Cold War Research Group; consultado en el Wilson Center Digital Archive.
- CIA, "Nicaragua's sandinista National Liberation Front", 14 de junio de 1979, CIA-RDP80T00942A001200040001-7